



**S.J.: 58/2026**

Se ha recibido en este Servicio Jurídico, para su preceptivo informe, la propuesta de modificación número 1 del contrato de obras denominado **“OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA. P.K. 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID)”** (Expediente: A/OBR-005434/2023)

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tenemos el honor de emitir el siguiente

## **INFORME**

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** A la citada petición de informe se acompaña la siguiente documentación:

- Acta de replanteo.
- Informe de supervisión.
- Resolución de aprobación del citado proyecto modificado número uno.
- Memoria explicativa de la modificación propuesta.
- Solicitud de autorización para redactar el proyecto modificado.
- Trámite de audiencia a la empresa constructora
- Trámite de audiencia al proyectista de la obra
- Escrito de alegaciones de la empresa adjudicataria HOCENSA, EMPRESA CONSTRUCTORA S.A



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100017775514142325514**

**Segundo.-** Por orden de fecha 21 de diciembre de 2023, se adjudicó el contrato de “OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA. P.K. 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID)” a la empresa HOCENSA, EMPRESA CONSTRUCTORA S.A A80592462, por un importe de 1.362.994,55 euros.

**Tercero.-** El contrato se formalizó en fecha 26 de enero de 2024, con plazo de ejecución de 8 meses e inició su ejecución en fecha 12 de junio de 2024.

**Cuarto.-** En fecha 16 de julio de 2025, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras dictó Orden de autorización para redactar un proyecto modificado nº 1 del contrato “OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA. P.K. 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID).”

**Quinto.-** Mediante Orden de fecha 6 de agosto de 2025 se autorizó la continuación provisional de las obras.

**Sexto.-** Mediante orden de 6 de febrero de 2026 se ha dictado Orden de aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato “OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA. P.K. 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID).”

**Séptimo.-** Mediante Orden de nueva ampliación del plazo de ejecución del contrato de fecha 16 de marzo de 2026 se amplía el plazo de ejecución hasta el 23 de junio de 2026.

**Octavo.-** Con fecha 25 de marzo de 2026 la Dirección General de Carreteras propone la modificación del contrato con fundamento en el apartado a) y b) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**Noveno.-** Con fecha 26 de marzo de 2026 se ha dictado orden de inicio del procedimiento de modificación del contrato de obras.



## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

**Primera.-** Procede, en primer lugar, determinar el régimen jurídico aplicable al expediente de modificación.

A tenor de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), apartados 1 y 2:

*“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.*

*2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.*

El contrato analizado se adjudicó el 21 de diciembre de 2023; por tanto, el régimen jurídico aplicable al presente modificado será el previsto en la vigente LCSP.

**Segunda.-** La legislación de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP:

*“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”.*



La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una separación del principio básico en materia contractual de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987). Constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración de los principios que rigen la licitación pública.

Así, y como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser precisamente en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. Se advierte igualmente que tal facultad debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos (Dictámenes de 10 de septiembre de 1998, 5 de diciembre de 1984 y 24 de julio de 2003), todo ello, por cuanto un uso indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas.

**Tercera.-** El régimen jurídico de modificación de los contratos del sector público se contiene fundamentalmente en los artículos 203 y siguientes LCSP, el primero de los cuales, señala:

*“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.*

*2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:*

- a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;*
- b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.*

*En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.”.*

Las modificaciones que pueden darse en cualquier tipo de contrato administrativo están reguladas en los **artículos 203 a 207 de la LCSP**, que distinguen entre modificaciones previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y aquellas no previstas en el mismo, constitutivas de: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

**Cuarta.-** En el caso que nos ocupa, dado que el pliego regidor de la contratación no preveía modificaciones en su clausulado, debemos acudir al art 205 LCSP, a cuyo tenor:

*“1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:*

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.*
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.*



*2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:*

***a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:***

*1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.*

*En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.*

*2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

***b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:***

*1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*

*2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*

*3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

***c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.***



*Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:*

*1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.*

*2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.*

*3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:*

*(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.*

*(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación”.*

Según data de la memoria que conforma el expediente, suscrita con fecha 25 de marzo de 2026, este Servicio Jurídico puede concluir que las modificaciones propuestas cumplen los



requisitos exigidos en el artículo 205.1 LCSP, pues encuentran su justificación en los supuestos a) y b) del mismo precepto.

En efecto, tal y como se desprende de la meritada memoria, existen tres tipos de causas distintas que exigen la modificación del contrato, dos de ellas son subsumibles bajo la letra b) del artículo 205.2 de la LCSP, mientras que la última lo es bajo la letra a) de dicho precepto.

Así, procedemos a extraer literalmente de la propuesta que conforma el expediente, las distintas causas que motivan la modificación del contrato, así como la justificación de las mismas:

***Supuesto A).*** *Cuando deviniera necesario añadir prestaciones adicionales a las inicialmente contratadas.*

*En relación con este supuesto, la LCSP establece los siguientes requisitos:*

- *Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al Órgano de Contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.*
- *Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

***La CAUSA 3:*** *modificación que encuentra su justificación en el supuesto A) “prestaciones adicionales” del art.205.2 de la LCSP:*

*1º) No permite un cambio de contratista por razones de tipo económico o técnico, ya que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.*

*Se imposibilita el cambio de contratista por cuanto existen interferencias entre las obras necesarias para el alumbrado y conducciones de riego con las obras del contrato original.*



*La ejecución de estas unidades de obra adicionales está directamente vinculadas a la obra que actualmente se encuentra en ejecución y afectan a elementos integrados en la propia infraestructura viaria.*

*Son bastantes elementos del contrato principal los que han de ejecutarse previamente como pueden ser los movimientos de tierra tales como excavaciones y rellenos. Sin haber ejecutado éstos, no sería factible comenzar con las obras de alumbrado y canalizaciones de riego. Ambas partes, instalaciones adicionales y obras de construcción de la glorieta, son inseparables a efectos de su ejecución sin un grave perjuicio de tipo económico y técnico.*

*Por otro lado, un cambio de contratista implicaría la necesidad de realizar un nuevo procedimiento administrativo, lo cual conlleva un aumento del plazo, y en consecuencia genera inconvenientes importantes. Entre estos podemos citar un aumento de las molestias para los usuarios de la vía debido a la mayor duración de las obras, y en consecuencia una mayor peligrosidad de la carretera por encontrarse ésta en una situación provisional.*

*Por todo ello, queda justificado que el cambio de contratista generaría un aumento significativo de costes por no ser posible un aprovechamiento eficiente de los recursos materiales y humanos, y por paradas en la ejecución de obra durante tiempos de espera entre intervenciones de diferentes contratistas, generando problemas de coordinación técnica y de ejecución.*

*2º) Implica una alteración en la cuantía que no excede del 50% del precio inicial, IVA excluido.*

*Esta alteración económica se estima en un +3,17% para la causa 3.*

**Supuesto B).** *Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de **circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato**, siempre y cuando se cumplan las **tres condiciones siguientes**:*

- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*
- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*
- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

*Tal es el caso de modificaciones de la Causa 1 y 2*

**CAUSA 1:** *modificación que encuentra su justificación en el supuesto B “circunstancias sobrevenidas que fueron imprevisibles” del art. 205.2 de la LCSP:*

*1º) Se deriva de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*



*Durante el desarrollo de las obras se han puesto de manifiesto determinadas circunstancias que no pudieron ser previstas con la debida diligencia en el momento de la redacción del proyecto y licitación del contrato, y que hacen necesaria la introducción de ajustes en la solución constructiva inicialmente prevista. En particular, la presencia de aguas subterráneas en el entorno de la glorieta ha puesto de manifiesto la conveniencia de incorporar un sistema de drenaje que permita encauzar dichas filtraciones y evitar posibles procesos de erosión en la base de la infraestructura.*

*Estas circunstancias han sido detectadas durante la fase de ejecución de las obras, como resultado del replanteo y de la comprobación efectiva de las condiciones del terreno así como tras las excavaciones para la formación de la base del cimiento de la infraestructura proyectada, por lo que no pudieron ser definidas con la precisión necesaria en el proyecto inicial ya que en este tipo de proyectos no es habitual la realización de investigaciones del nivel freático ni el cálculo del flujo de aguas subterráneas.*

*2º) Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*

*La modificación propuesta por la causa 1 no altera la naturaleza global del contrato ni su objeto principal, que sigue siendo la ejecución de las obras de construcción de una glorieta para mejora de la intersección y de accesibilidad a las instalaciones deportivas situadas en el entorno de la carretera M-103.*

*Las actuaciones incorporadas mediante el presente modificado tienen carácter complementario respecto del objeto principal del contrato, se limitan a ajustar soluciones técnicas concretas, y no modifican la funcionalidad esencial de la obra proyectada.*

*3º) Implica una alteración en la cuantía que no excede del 50% del precio inicial, IVA excluido.*

*Esta alteración económica se estima en un +13,07% para la causa 1, por tanto, no excede del 50%.*

**CAUSA 2:** *modificación que encuentra su justificación en el supuesto B “circunstancias sobrevenidas que fueron imprevisibles” del art. 205.2 de la LCSP:*

*1º) Se deriva de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*

*Resulta imprevisible conocer antes de la ejecución de las obras la cota exacta a la que discurre la red de abastecimiento, al no existir datos de ésta, ni arquetas o puntos de revisión que permitiesen disponer de dicha información, y tenerla en cuenta en el desarrollo de los trabajos.*

*2º) Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*

*La naturaleza misma del contrato no varía puesto que el fin último es la construcción de una glorieta para la mejora de la accesibilidad a las instalaciones deportivas.*

*3º) Implica una alteración en la cuantía que no excede del 50% del precio inicial, IVA excluido.*

*Esta alteración económica se estima en un -13,03% para la causa 2, por tanto, no excede del 50%”.*



Asimismo, se da satisfacción a lo dispuesto en el artículo 203 LCSP, en cuanto a que se justifica el interés público del siguiente modo:

*“Causa 1: el interés público de esta modificación radica en garantizar la durabilidad, seguridad y correcta funcionalidad de la infraestructura proyectada. A tal efecto, se incorpora una canalización de drenaje destinada a encauzar las aguas subterráneas, evitando procesos de erosión que podrían comprometer la estabilidad de la cimentación de la glorieta y previenen futuras actuaciones correctivas en beneficio de la eficiencia en el gasto público. Asimismo, esta actuación contribuye a mejorar la accesibilidad a las instalaciones deportivas colindantes con la carretera M-103, reforzando el uso público seguro de dichas infraestructuras.*

*Causa 2: responde al interés público de racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia en la ejecución del contrato, suprimiendo una infraestructura inicialmente prevista (una conducción visitable proyectada) que ha resultado innecesaria a la vista de las condiciones reales de la obra. Esta decisión evita costes de ejecución superfluos y reduce futuras cargas de mantenimiento, en línea con los principios de eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los recursos públicos, sin menoscabo de la funcionalidad del proyecto.*

*Causa 3: el interés público de esta modificación se concreta en mejorar las condiciones de uso, seguridad y calidad del espacio público, así como garantizar la ejecución del contrato como obra completa de acuerdo con el artículo 13 de la LCSP. En concreto, permite dotar de iluminación a la parada de autobús proyectada, incrementando la seguridad de los usuarios, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Asimismo, posibilita la instalación de un sistema de riego para la rotonda, favoreciendo su integración paisajística mediante la implantación de especies vegetales, lo que redundará en la mejora del entorno urbano y del bienestar de los ciudadanos.”*

**Quinta.-** En relación con el procedimiento a seguir, como indica la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid (por todos, sus Dictámenes de 29 de octubre de 2015 y de 25 de septiembre de 2013), la normativa procedimental a aplicar debe ser la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de interpretación, modificación y resolución, por aplicación de las disposiciones transitorias del Código Civil, erigidas en derecho intertemporal común. En idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en sus



Dictámenes 3062/1998 y 975/2002, así como el Dictamen 328/2012, de 27 de diciembre, del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

Así, el artículo 191 LCSP, dentro del capítulo relativo a las prerrogativas de la Administración Pública, regula el procedimiento de ejercicio de estas prerrogativas, señalando:

*“1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.*

*2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.*

*3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:*

*a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.*

*b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.*

*c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.*

*4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”.*

Consta en el expediente el cumplimiento del trámite de audiencia concedido tanto al contratista como al proyectista.



Además, habrá de tenerse en cuenta, como señalan los Dictámenes 511/12 y 515/12, de 19 de septiembre de nuestro órgano consultivo, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la normativa contractual, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

En virtud de lo expuesto, procede emitir la siguiente

### **CONCLUSIÓN**

El proyecto de Orden de modificación sometido a Informe **merece el parecer favorable** de este Servicio Jurídico.

Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

**LA LETRADA JEFE-ADJUNTA EN LA CONSEJERÍA DE  
VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

Firmado digitalmente por: GÓMEZ CUERDA MARÍA PALOMA  
Fecha: 2026.04.15 12:55

Fdo.: Paloma Gómez Cuerda

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
CONSEJERÍA DE VIVIENDA TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100017775514142325514**